

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por los defensores de los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderon, contra los procedimientos del Gefe político del Distrito de Chalchicomula, que los sentenció á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Juan N. Quintana á nombre de los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderon, contra el Gefe político de Chalchicomula, por haberlos condenado á sufrir la pena capital, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice: que los fundamentos que dicho C. Lic. Quintana hace valer en su escrito de queja, así como en el de 31 de Mayo último, constante á fojas 11 y 12 del expediente, no pueden considerarse por el Juzgado de su digno cargo, por que no son aplicables al caso, segun pasa brevemente á demostrarlo.

Se dice en primer lugar, que por atacar la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado la soberanía del Estado, no puede aplicarse á los reos. El concepto de que la ley sea en efecto atentatoria á la soberanía de los Estados, á ser cierto, (cuestion en que desde luego no entro, por ser absolutamente estemporánea) hay que considerar que Puebla de un modo tácito la ha hecho suya, con solo haberla publicado y estar obligando á todos sus empleados á que la obsequien.

Precisamente el caso que nos ocupa es una prueba de ello: se aprehendieron á los reos mencionados, se les sujetó á la ley de 3 de Mayo, se les condenó á la última pena, que en virtud de lo que la misma ley dispone, los defensores de estos interpusieron el recurso de indulto.

Vemos pues, que tanto los reos como la autoridad que los juzgó, han reconocido la ley, y ni por un pienso la calificaron de atentatoria.

Si el Estado no se queja de la ley, si el Estado le dá cumplimiento espontáneamente ¿con qué motivo los reos tratan de nulificarla?

Si el Estado de un modo indirecto ha hecho suya la espresada ley, si respeta y reconoce á la autoridad que la expidió ¿por que razon se ha de poner en duda su legitimidad, no más por que así conviene á la malicia de los que la han infringido?

Ciertamente, C. Juez, no hay que hacer grandes razonamientos sobre este punto, porque ni oportuno es tratarlo. El Estado, que es el que se supone agraviado, acata la ley; deben tambien acatarla los infelices que se sujetan á sus prevenciones. Así es que no puede considerarse por V., lo alegado á este respecto por el C. Lic. Quintana, para otorgar el amparo que pide.

En segundo lugar, se dice: que por haber sentenciado la autoridad contra quien se dirige la queja, fuera del término que el art. 3º de la ley de 3 de Mayo señala, ha infringido las garantías individuales que se conceden al hombre en los arts. 13, 14, 19, 20 y 21 de la Constitucion general.

Por la confesion de esta autoridad y aun por las constancias del proceso, se comprueba el hecho de que efectivamente se sentenció despues de los quince dias. Pero conviene advertir, que este término es contra los reos; de suerte que si se amplia, es en su beneficio y para su mejor defensa, y que por la infraccion quizá haya mérito para que se exija responsabilidad á la autoridad, mas no para que se dude de su jurisdiccion.

La ley de amparo en su art. 13, fija á los jueces cinco dias para que pronuncien sentencia, y este término así como todos los demás que en la misma ley se designan, parece que son improrogables. Pues bien, infinitos casos ha habido y se presentan

diariamente, que negocios de esta clase se fallan mucho despues de los cinco dias, y sin embargo, á nadie le ha ocurrido desconocer la jurisdiccion de los Juzgados de Distrito por ese motivo.

En efecto, no porque un Juez infrinje una ley (múchas veces necesariamente) acaba su autoridad; hay motivo para que se le imponga una pena, para que se le haga un estrañamiento ó para que se prevenga otra cosa por su superior; pero no para que se suponga, ni por un momento, concluida su jurisdiccion. Tal cosa sucede en el caso de que tratamos: la ley de plagiarios y salteadores, concede á los Gefes políticos quince dias para la conclusion de la causa; si la sentencia la pronuncian despues de este tiempo, indudablemente que es válida, en atencion á que la ley no dice otra cosa en contrario, aunque por su superior podrá imponerles una pena, si dieren lugar á ella por la infraccion.

Luego si la sentencia es válida, en este caso no hay infraccion de los arts. 13, 19, 20 y 21 de la Constitucion general, supuesto que las garantías individuales consignadas en ellos, están en suspenso por la ley de 3 de Mayo indicada para los salteadores y plagiarios, ó lo que es lo mismo, para los reos á quienes representa en este juicio el C. Lic. Quintana, por estar juzgados y sentenciados en virtud de estos delitos.

Tampoco hay infraccion del art. 14, porque á dichos reos no se les ha juzgado sino por una ley dada con anterioridad al delito que cometieron, y por la autoridad previamente establecida. Sobre esto ni esplicaciones caben.

Así pues, si no existen las infracciones de que habla el C. Lic. Juan N. Quintana en sus dos escritos de queja, el amparo que solicita para los reos Ortega, Martinez y Calderon, debe estrictamente negársele.

El que suscribe, en consideracion á lo expuesto, pide á V. asi se sirva decretarlo, con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Mayo 26 de 1874.—*R. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Julio 17 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los defensores de los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderon, contra los procedimientos del Gefe político del Distrito de Chalchicomula, que los sentenció á la última pena, con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873; el informe de dicha autoridad y la causa que instruyó; el parecer fiscal; lo alegado y cuanto ha debido verse.

Considerando: que para que se les otorgue á los procesados la gracia solicitada, sirve de fundamento, que el C. Gefe político los sentenció pasado el término fijado por la ley, habiendo, por lo mismo, carecido de jurisdiccion, resultando violadas en perjuicio de ellos, las garantías que otorgan los arts. 14, 13 y 19 en su 1ª parte, 20 y 21 de la Constitucion; el primero, por la falta de aplicacion exacta de la ley conforme á la que se lo juzgó, y los demás por que dejaron de estar suspensas para ellos las garantías que otorgan, en virtud de que se pasó el término dentro del cual debieron estar sentenciados, vulnerándose tambien la soberanía del Estado por ese motivo.

Que de la causa instruida consta probado cumplidamente, que los reos de quienes se trata fueron juzgados y sentenciados, por haber cometido los delitos de robo, asalto y asesinatos en la ranchería de Jesus Maria el dia 25 de Enero del año próximo pasado, estando comprendidos por lo tanto, en lo que determina la ley de 3 de Mayo referida.

Que la autoridad política ha sido competente, sin que pueda decirse que quedó sin jurisdiccion al dejar pasar el término dentro del cual debió pronunciar sentencia, una vez que la ley no pone tal limitacion, y solo previene, que el dejar pasar los tér-

minos que fija será motivo de responsabilidad, no pudiendo violarse en perjuicio de ellos garantías de que quedaron privados desde el momento que cometieron los delitos por que fueron juzgados y sentenciados, y que declaró suspensas esa ley.

Que en cuanto á las que concede el art. 14, menos pueden decirse violadas, cuando la ley se ha aplicado á delinquentes que ella determina, habiendo sido por lo mismo exacta la aplicación; y que por lo que hace á que la ley vulnere la soberanía del Estado, aun suponiéndolo, con el hecho de haberse publicado sin que los poderes de él lo hayan resistido, es de absolverse.

Por cuyas consideraciones, y en razón de no estar comprendido el caso en los que enumera el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderón, contra el procedimiento del C. Gefe político del Distrito de Chalchicomula, al sentenciarlos con arreglo á la ley de 3 de Mayo del año próximo pasado, á la pena de muerte, por los delitos de robo, asalto y asesinatos.

Hágase saber; publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y Periódico Oficial del Estado, y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revisión.

El C. Juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero.* Ante mí,—*Antonio García Mosqueira.*

Es copia que certifico. Puebla, Julio 18 de 1874.—*Antonio García Mosqueira*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 31 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por los defensores

de los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderón, contra los procedimientos del Gefe político del Distrito de Chalchicomula, que los sentenció á la última pena, habiendo formádoles causa en virtud de lo dispuesto por la ley de 3 de Mayo de 1873.

Considerando: que en el ocurso en que el amparo se solicita, se alega como fundamento, que el Gefe político del Distrito de Chalchicomula, pronunció su sentencia fuera del término que la ley designa.

Que con arreglo á ella pronunciar sentencia despues del término que designa, es motivo de responsabilidad.

Que la dilación en pronunciar sentencia, no importa un ataque á alguna garantía, pues entre las que consigna la Constitución general, no figura la de que se pronuncie sentencia definitiva dentro de un término dado.

Que tampoco puede admitirse como fundamento del amparo, el que la ley de 3 de Mayo de 1837, ataque la soberanía del Estado de Puebla, por proceder con arreglo á ella, por no haber públicádose en el mismo Estado, pues en el expediente aparece que las autoridades del propio Estado, en los casos ocurrentes, han procedido con arreglo á esa ley.

Que el Gefe político del Distrito de Chalchicomula, ha procedido dentro de la órbita de sus facultades, al encausar y sentenciar á los acusados.

Que por lo mismo no se han violado en las personas de estos, las demás garantías que pretendiendo el amparo, invocan los defensores de los acusados referidos.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, por el Juzgado de Distrito de Puebla á 17 de Julio último, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los reos Mariano Ortega, Diego Martinez y Julian Calderón, contra el procedimien-

to del Gefe político del Distrito de Chalchicomula, al sentenciarlos con arreglo á la ley de 3 Mayo del año próximo anterior á la pena de muerte, por los delitos de robo, asalto y asesinato.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan S. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre 8 de 1874.—*Enrique Landa.*

CRIMINAL.

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Aguascalientes contra Eulogia Miranda y María Nestora Muñoz, por circulación y portacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que con fecha 26 de Abril del presente año, la Jefatura política de esta Capital, dirigió al Juzgado de su digno cargo una comunicacion, dando aviso de que el policía número 2 habia aprehendido á Eulogia Miranda y á María Nestora Muñoz, en virtud de haber hallado en su poder, cinco pesetas y siete reales de moneda falsa, quedando en la carcel las presuntas reas á disposicion del Juzgado.

Como consecuencia, se practicaron las averiguaciones consiguientes al presente caso, y se nombraron peritos á los CC. Casiano Gueda y Juan Saucedo, plateros; quienes cumpliendo con su cometido, practicaron un

reconocimiento en las monedas citadas, y del que resultó, segun su real saber y entender, puede asegurarse que son falsas, como consta á fojas 2 de estas diligencias.

Continuándose las averiguaciones conducentes, se examinó al policía número 10, D. Roman Terrones, y previa la protesta de la ley dijo: que en la noche del sábado 25, estaba frente á la Iglesia de San Marcos, junto con el segundo cabo de policía C. José María Ortiz y el policía número 2, C. Evanisto García, cuando llegó el joven que presentó, diciéndole al último, que en el puesto donde estaba vendiendo cigarreros en la misma plazuela citada, estaba una muger que habia ido á comprar cigarreros con una peseta de laton, y que seria bueno le fuese á dar un susto; entonces dispuso el cabo fuese García, quien volvió con dos mugeres, declarando que una de ellas habia dado á otra un paño, el que contenia un dulce, una churumbela con cigarreros, cinco pesetas y siete reales sencillos envueltos en unos papeitos, los que presentados fueron reconocidos por todos, diciendo que eran los mismos á que se referian. Que en vista de esta declaracion, el cabo ordenó al deponente, acompañara al policía número 2 para conducir á la carcel á las dos mugeres expresadas. En seguida tomáronse las declaraciones á los testigos, empezando por Agustín Chavez, quien reprodujo su dicho referido al policía, manifestando á la vez no se constituiria parte.

El policía número 2, C. Evanisto García, fué examinado con arreglo á la cita que le resulta en el oficio que obra á fojas 1ª, el que declaró de conformidad con el anterior, asegurando ser cierto llevó á la carcel á las dos mugeres expresadas, por orden del cabo José M. Ortiz, y causa que se ha referido.

Se mandó poner en presencia del Juzgado á Eulogia Miranda, y previas las formalidades debidas, se le tomó su declaracion preparatoria, y en la que expuso, con relacion al punto de que nos ocupamos, lo que consta en fojas 4 vuelta, en que confiesa ser cierto